

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1992/S-2/NGO/1  
30 de noviembre de 1992

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
Segundo período extraordinario de sesiones  
Noviembre-diciembre de 1992  
Tema 3 del programa

CARTA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 1992 DEL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE TURQUIA ANTE LA REPUBLICA DE HUNGRIA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y CARTA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1992 DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS A. I. DE LA MISION PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE DERECHOS HUMANOS

Comunicación escrita presentada por el World Federalist Movement,  
organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva  
de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la comunicación siguiente, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

GE.92-14743/8536f (S)

[30 de noviembre de 1992]

1. El World Federalist Movement, que se interesa por la aplicación de los principios federalistas a todos los niveles de gobierno, está convencido de que es necesario un amplio intercambio de pareceres, de datos y de documentación para hallar soluciones pacíficas y justas a los conflictos en la zona de la antigua Yugoslavia.
2. El World Federalist Movement estima que todas las partes importantes en los citados conflictos deberían estar presentes, lo mismo que las organizaciones de la zona que trabajan por la solución de los conflictos. Estas partes y organizaciones deberían poder someter sus puntos de vista y su documentación al período extraordinario de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos bajo su propia responsabilidad.
3. Por si la Comisión no adopta esta política y sólo se permite intervenir y presentar documentos a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas, y conscientes de la necesidad de un amplio intercambio de pareceres, presentamos el documento adjunto sin por ello responsabilizarnos en absoluto de las opiniones que en él se manifiestan y de los hechos que en él se exponen.

COMUNICACION DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA  
SRPSKA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES Y EL INFORME DEL RELATOR ESPECIAL  
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Sobre la base del mandato conferido al Relator Especial, que figura en la resolución 1992/S-1/1 de la Comisión de Derechos Humanos, de "investigar sobre el terreno la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia, en particular en Bosnia y Herzegovina, y... [recibir] permanentemente información pertinente y fiable sobre la situación de los derechos humanos en ese territorio de los gobiernos, los particulares, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, aprovechando la existencia de los mecanismos existentes de la Comisión de Derechos Humanos", señalamos con toda justicia que en su tercer informe sobre la situación en la antigua Bosnia y Herzegovina, el Relator Especial no ha cumplido su mandato satisfactoriamente.

Las deficiencias que caracterizan las actividades generales del Relator Especial son aún más patentes en el presente informe que en los precedentes.

1. El Relator Especial dedica la mayor parte de su atención a la situación en el territorio controlado por las autoridades serbias (la República SRPSK), mientras que sólo presta a la situación en el territorio controlado por las autoridades musulmanas, y a la existente en la comunidad croata de Bosnia y Herzegovina, una atención insignificante y extremadamente parcial. El hecho de que el Relator Especial use categorías tales como la "situación en los territorios bajo control gubernamental y/o bosnio croata" por una parte, y "situación en los territorios bajo control serbio" por otra, demuestra la manera en que el Relator Especial enfoca la cuestión. Al poner la palabra "bosnio" antes de la palabra "croatas" tiene la intención de ocultar el hecho de que tales serbios son también "bosnios", han vivido en la antigua Bosnia y Herzegovina durante siglos, e inmediatamente antes de la guerra civil representaban la mayoría de la población, con un 65%, en el territorio de Bosnia y Herzegovina. La finalidad de ese enfoque es decir implícitamente que los serbios son en cierto sentido unos "agresores" venidos del exterior de Bosnia y Herzegovina.

2. Basando sus comprobaciones en fuentes indirectas, sacando las principales conclusiones de informes procedentes de uno o dos testigos (siempre anónimos), o de una vaga "fuente fidedigna" o, con mucha frecuencia, de especulaciones arbitrarias, el Relator Especial acusa a los serbios en la antigua Bosnia y Herzegovina, sin tener ningún fundamento para ello, de crímenes inauditos y, sobre todo, de la perpetración sistemática de esos crímenes con la indudable intención de demostrar que los serbios proyectaban de antemano la destrucción de naciones enteras, acusación que no está apoyada en ninguna prueba.

3. El Relator Especial se ocupa de la violación de los derechos humanos y de los crímenes de guerra contra los serbios en la antigua Bosnia y Herzegovina sólo en la medida precisa para demostrar que los musulmanes y croatas se han visto en la necesidad de recurrir a tales actos, lo que a veces llega a rozar lo absurdo en este tercer informe. No se dice ni una sola palabra en el informe sobre el gran número de localidades serbias incendiadas y totalmente destruidas. Apenas se menciona en el informe el gran número de serbios, principalmente civiles -mujeres, niños y ancianos- encerrados en docenas de

prisiones musulmanas y croatas, en unas condiciones de vida insoportables (túneles, sótanos). En los pocos casos en que se alude a ellos, los guardianes de las prisiones son humanos y corteses, y las condiciones de vida son casi perfectas. En el informe se ignora totalmente la existencia de decenas de miles de serbios, rehenes étnicos, retenidos a la fuerza en las ciudades que controlan las autoridades musulmanas y objeto a diario de terribles torturas.

4. En el informe no se menciona el hecho de que las autoridades de la República SRPSKA han entablado en varias ocasiones acciones legales contra individuos o grupos de individuos serbios por el delito de aprovechar el estado de guerra para perpetrar diversos delitos, así como crímenes contra personas civiles y prisioneros de guerra (por ejemplo, el caso del denominado "grupo de Zuca", capturado hace tres meses), así como otras medidas legales encaminadas a mejorar la situación en materia de derechos humanos (especialmente la decisión unilateral de dismantelar los campos de detención). A ese respecto, es especialmente significativa la comunicación del Dr. Radovan Karadzic, de fecha 19 de noviembre de 1992, en la que se invita a todas las personas del territorio de la República SRPSKA a que regresen a sus hogares, con independencia de su origen nacional y ofreciéndoles garantías de seguridad.

5. En el informe se da una visión deformada de las relaciones entre las autoridades serbias y los representantes y funcionarios de las organizaciones internacionales presentes en el territorio de la antigua Bosnia y Herzegovina. Además, en el informe se desconoce el hecho de que la parte serbia no ha puesto nunca en peligro a los miembros de la Fuerza de protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) (incluso el cuartel general de esa fuerza ha quedado instalado bajo protección serbia en el acuartelamiento de Lukavica, cerca de Sarajevo). En el informe se ignora completamente el alto grado de cooperación de las autoridades serbias para la aplicación de la decisión unilateral de dismantelar los campos de detención en el territorio de la República SRPSKA, como en varias ocasiones han reconocido los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el informe se silencia completamente el hecho de que el ejército de la República SRPSKA ha sufrido bajas en operaciones de protección de los convoyes humanitarios del ACNUR destinados a la población musulmana.

6. Al pronunciarse políticamente repetidas veces acerca de la situación en la antigua Bosnia y Herzegovina, especialmente en el párrafo 2 de su informe, el Relator Especial ha rebasado de manera inadmisibile los límites del mandato que le fue conferido en la resolución 1992/S-1/1 de la Comisión de Derechos Humanos.

7. Deploramos que a nuestro juicio este tercer informe del Relator Especial no corresponda en lo más mínimo a la importancia y la seriedad del mandato del Relator Especial ni a la reputación del órgano que representa, pues carece fundamentalmente de todo sentido de la verdad y la justicia. Esa es la razón por la que rechazamos este informe en su totalidad.

8. Por último, señalaremos los hechos siguientes:

- a) Las propias Naciones Unidas se han colocado en la situación de ser al mismo tiempo juez y parte, por conducto de sus diferentes organismos y órganos;
- b) Mediante un bloqueo sin precedentes de los medios de comunicación y una censura oficial, sobre todo en los países de Europa occidental y en los Estados Unidos de América, así como mediante la expulsión de los serbios de todas las organizaciones internacionales, se les ha privado completamente del derecho no sólo de denunciar a quienes están cometiendo abiertamente un genocidio contra ellos, sino también del derecho de legítima defensa;
- c) Sólo se niega al pueblo serbio el derecho de autodeterminación, concedido a los demás pueblos de la antigua Yugoslavia;
- d) Existe el deseo de expulsar al pueblo serbio, con el auspicio de las Naciones Unidas, de la antigua Bosnia y Herzegovina, donde ha vivido desde tiempo inmemorial y representaba la mayoría absoluta antes del genocidio cometido contra él en la primera y en la segunda guerras mundiales, pues se insiste en la falsa premisa de la "agresión serbia en Bosnia y Herzegovina";
- e) Sólo se impone contra el pueblo serbio un bloqueo económico y militar sin precedentes;
- f) La selección del Relator Especial y la tolerancia mostrada hacia su extrema parcialidad indican claramente a nuestro juicio que el pueblo serbio en su conjunto ha sido declarado fuera de la ley y que cualquier Estado tiene permiso de las Naciones Unidas, la más respetada organización internacional, para tratar a 12 millones de serbios según le parezca, con inclusión de la posibilidad de darles muerte, mediante la aplicación injustificada de las disposiciones correspondientes del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

-----